



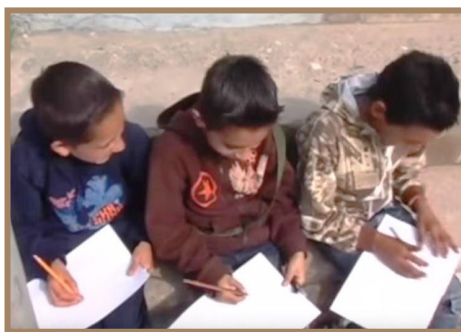
Alta deserción escolar en niños campesinos

Niños campesinos abandonan la escuela por falta de recursos, generando un mayor retraso en poblaciones que tradicionalmente han estado al margen de las políticas del gobierno.

En Colombia, el 83% de los niños campesinos menores de 5 años no van al colegio. Así lo revelan las cifras del último Censo Agropecuario, lo que deja en evidencia el abandono por parte del Estado a esta población.

“La parte económica y la falta de apoyo a las familias, específicamente al estudiante, quien en muchas ocasiones no tiene acceso a útiles escolares, es un factor determinante a la hora de que los niños campesinos vayan a la escuela. Hay escuelas que no tienen baños, tableros, paredes, y mucho menos acceso a tecnología, tanto así que son los maestros quienes dan recursos para poder desarrollar una clase, lo que genera desmotivación en los estudiantes”, expone Luz Dary Bolaños, directora del Ceid – ADE.

La población menor de edad es la más afectada por este fenómeno. En sectores como Vichada, Guaviare



y Arauca escasamente el 4.5% de los niños asiste a la escuela. Esto obedece a carencia de planteles educativos en condiciones dignas para que los niños puedan estudiar.

Por otro lado, de los menores de 5 a 16 años, apenas el 20,3% asiste a la escuela, y la deserción entre los jóvenes de 17 a 24 años, llega al 73,7%. Esto deja en evidencia que las políticas del gobierno no llegan a todo el país. “Lo anterior conlleva a que las familias decidan retirar a los menores, porque resultan siendo más productivos en la finca al gene-

rar un beneficio económico, o una ayuda en el trabajo de los padres”, agrega Bolaños.

El panorama entre las niñas adolescentes no es menor. El abandono de la escuela deriva en tener que buscar alternativas que les permitan conseguir una estabilidad económica. “Falta generar bastantes oportunidades, proyectos y programas de educación sexual desde el Ministerio que conlleven a mejorar estas problemáticas”, sustenta Aura Nelly Daza, Secretaría Jurídica de la ADE.

El analfabetismo en los niños y niñas campesinos mayores de 15 años llega al 12.5%, en La Guajira esta cifra supera el 20%. Cada una de estos datos es escandaloso y ponen en duda el supuesto objetivo del gobierno, a la hora de hacer que Colombia llegue a ser “la más educada en 2025”.

El Movimiento Pedagógico prepara su tercer gran encuentro

El nuevo gran reto para el Movimiento Pedagógico en América Latina se traslada a la universidad, porque es el nuevo objetivo de la comercialización neoliberal.

Delegados de Colombia, Ecuador, Venezuela, Perú y Bolivia se reunieron durante tres días para socializar sus experiencias pedagógicas y prepararse para el III En-

cuencro “Hacia un movimiento pedagógico latinoamericano”, a realizarse en diciembre en Costa Rica.

Líderes sociales, docentes y pedagogos comprometidos en con la

consolidación del movimiento pedagógico en América Latina, como la puerta hacia la educación contextualizada y de calidad, se reunieron analizando un desafío a superar.

Fátima Da Silva, vicepresidenta de la I.E. para América Latina, dice: “el desafío que está puesto en la agenda educacional tiene que ver con el proceso de evaluación, puesto que hay por parte de los gobiernos y los organismos multilaterales una preocupación y una cierta valoración en todo un proceso evaluativo. Ven cómo, por parte de la Organización Mundial del Comercio, se está discutiendo la gestión del TISA, que es la gestión de la comercialización y la mercantilización de la educación pública en todo el mundo”.

En este tercer encuentro auspiciado por la Internacional de la Educación se estrenará un espacio de socialización de experiencias pedagógicas; lo cual fortalece el movimiento latinoamericano para exaltar los compromisos y protagonistas del cambio en el continente, los docentes que repiensen la educación desde el aula.

Luchar contra la comercialización de la educación será la bandera que acompañe el encuentro. “América Latina tiene una gran deuda social y es la gestión de la educación de nivel superior, como consecuencia del proceso de comercio de esta que hay en todos los países latinoamericanos. Aunque esto no quiere decir que en los otros niveles también



exista una falta de compromiso por parte de los Estados. Sin embargo, el problema al que se deben enfrentar ahora es que la educación superior está siendo hecha con recursos públicos”, agregó Da Silva.

Eduardo Pereira, secretario de Relaciones Internacionales de Ctera, expone “la construcción que nosotros venimos haciendo no sólo tiene que ver con los encuentros o eventos de toda la región cada dos o tres años, sino que abarca cómo se construye desde abajo, desde cada escuela, todo el movimiento pedagógico”.

Una lucha que enfrenta Fecode en su trasegar sindical, en este tercer encuentro por el movimiento pedagógico visibilizará el quehacer de los cambios, estrategias y conquistas para establecer una educación no impuesta sino concebida desde las necesidades propias. Asimismo, el compromiso de los docentes por reivindicar sus derechos, pese al modelo neoliberal que se ha apoderado abierta y soterradamente de América Latina.

Cerrar licenciaturas, la nueva reforma a la Ley 30 del MEN

La resolución que obliga a cambiar estructuras internas en las universidades que ofrecen licenciaturas es tan grave que amplía la deuda histórica que el gobierno tiene con las universidades públicas.

El Ministerio de Educación adelanta un proyecto de resolución que establece características específicas en los programas de licenciatura, en las universidades formadoras de docentes. Una medida que vulnera la autonomía universitaria y oculta la deuda que el Ministerio tiene con las 32 universidades públicas por 16 billones de pesos. Los estudiantes ven vulnerados sus derechos.

“El Ministerio ya no quiere presentar una propuesta global de modificación a la Ley 30, sino que ha venido implementando reformas parciales, lo que ha llevado a la fragmentación de respuesta de docentes, estudiantes y comunidad en ge-

neral”, manifestó Fabio Castro, docente universitario.



Jorge Gaitán, estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional, comenta: “estamos exigiendo que se nos respete la autonomía universitaria y que como estudiantes podamos participar en cómo debe ser el horizonte de nuestra investiga-

ción, el plan docente y las mallas curriculares de cada una de las unidades académicas”.

Efectivamente, con este proyecto, el gobierno nacional busca aplicar la llamada reforma a la ley 30. Los estudiantes expresan que el Ministerio lo viene adelantando de manera fragmentada. “Luego de que la Mesa Amplia Nacional Estudiantil tumbara la ley 30, el gobierno nacional de Santos comenzó a plantear microrreformas para hacer cumplir las modificaciones hechas a esta ley y, una de ellas, es precisamente este proyecto de resolución”, agrega Gaitán.

La calidad en la educación es uno de los factores más importantes para

generar calidad de vida y desarrollo; la excelencia de los educadores depende de la formación que imparten en sus programas de licenciaturas. Fabio Castro, docente universitario, apunta otro elemento: “la ley 115 también se ha visto afectada porque ha venido haciendo una contrarreforma a la educación. Tanto

así, que lo que se pretende hacer con las licenciaturas no sólo afectará la vida académica de las universidades, los estudiantes y los futuros docentes, sino lo que pueda suceder en los colegios, de ahí que no es de extrañar que se insista en suprimir o acabar algunas áreas”.

Frente al tema, la Asociación Colombiana de Universidades le hizo saber al Ministerio que las instituciones educativas no deben ser notificadas de hechos cumplidos, y resultados divulgados por los medios, desconociendo las funciones misionales y afectando la imagen de la educación superior.

Invertir en educación superior antes de promocionarla

El abandono y el olvido que el gobierno le inyecta a la educación pública, se ha visto reflejado en los resultados de las pruebas internacionales.

El Ministerio de Educación promueve a Colombia como destino de educación superior, una medida que no se ajusta al deterioro en el que se encuentran las universidades públicas y la falta de capacitación a los docentes. Los actuales problemas económicos en la enseñanza son la principal barrera en este proyecto.

“Colombia tiene un rezago de más de 60 años en infraestructura educativa. A esto se suma el hecho de que el presupuesto para educación nacional cada vez está más menguado, pese a que el país ocupa en las pruebas internacionales los últimos, penúltimos o antepenúltimos puestos”, expone Armando Ramírez, docente universitario.

Por otro lado, un proyecto tan ambicioso no parece tener buen futuro en las universidades públicas del territorio nacional, la infraestructura universitaria no brinda las mejores garantías. “A la política es-



tatal para educación pública le hace falta mucho, a fin de cumplir el objetivo de una educación de calidad, esto como consecuencia, principalmente, de la falta de presupuesto para las universidades públicas. Así como para infraestructura física, y

la investigación y capacitación docente, esto sin desconocer la falta de cobertura”, dice Javier Sarmiento, integrante del Ceid fecode.

El Ministerio de Educación debería dar prioridad a las mesas de trabajo nacional, la cultura y cooperación como complementos de desarrollo local, antes de promover que la educación en el país es las mejores del continente.

“¿Cómo hacer de Colombia un país atractivo para el estudio, cuando el estado ni siquiera se ha preocupado por la calidad de la educación de los jóvenes colombianos?”, pregunta Ramírez. El país tiene una historia de profundas desigualdades que se reflejan en el rezago del sector educativo y cada territorio tiene su propia historia y necesidad.

El elitismo universitario que impera en Colombia

En Colombia, la precarización del mercado laboral es el principal efecto negativo al que se deben enfrentar los nuevos profesionales.

Encontrar estabilidad laboral o trabajo en Colombia se ha convertido en un reto o quizás en un privilegio, puesto que en la actualidad, esto depende de la universidad de donde sea el egresado.

Hoy, las empresas buscan sus perfiles profesionales ya no de

acuerdo a las necesidades. La ocupación laboral de las empresas en Colombia depende más del supuesto prestigio de las universidades y no en las capacidades de los profesionales que buscan empleo.

Carolina Bautista, docente universitaria, plantea que en Colombia:

“no es lo mismo ser un ingeniero o un administrador de empresas de la Universidad del Tolima, que de la Universidad de Los Andes. Tanto así que un profesional egresado de la Universidad del Tolima se vincula con un salario de más o menos un millón y medio de pesos, mientras

que de los años es de tres millones ochocientos o cuatro millones; lo anterior tiene que ver con que la educación está pensando más en las preferencias de las empresas, que en las necesidades sociales que exige actualmente el país”.



Las empresas de hoy expresan una élite académica especial por sus méritos o más una élite social, en donde los privilegios y prejuicios

son transmitidos de generación en generación.

“El prestigio y el nombre que una universidad va logrando progresivamente a lo largo de su existencia influye considerablemente a la hora de adquirir un empleo”, afirma José Guillermo Martínez, decano de la facultad de Educación de la Universidad Javeriana.

Meritocracia, dicen unos; elitismo, responden otros; y en el medio. Lo cierto es que el

mismo Estado contribuye a esta discriminación con los rankings que hace de instituciones educativas o cuando el presidente mantiene un círculo cerrado de altos funcionarios de una misma universidad.

Recién egresados se quejan de encontrar menos opciones de empleo, sobre todo, si se es egresado de una institución universitaria de poco nombre, por eso le hacen un llamado las empresas para que hagan un esfuerzo real por valorar las capacidades del candidato. Es decir, se debe medir su formación académica versus los resultados de pruebas específicas.

Según el gobierno, si usted gana más de \$7.000 diarios es rico

Pensar que una persona con seis mil pesos no es considerada pobre en el país está completamente desfasado de la realidad.

Según las cifras del Dane, en Colombia la pobreza no existe, una afirmación que se aleja de la realidad que a día a día viven muchos colombianos, quienes en su mayoría deben vivir con un mínimo.

El Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas considera que un colombiano no es pobre si sus ingresos alcanzan los 6.947 pesos diarios. Recursos que deben resolver las necesidades mínimas de un grupo familiar.

Mario Valencia, vocero de la Red Justicia Tributaria, lo desmiente: “creer que una persona con un poco más de seis mil pesos no es considerada como una persona pobre, está lejos de la realidad nacional”.

Una familia compuesta mínimo por tres personas debe pagar, arriendo, alimentación, servicios públicos, transporte y vestuario, entre otras necesidades básicas. Los ciuda-

danos manifiestan su inconformidad. El gobierno sostiene que la cifra de desempleo se ubica en un solo dígito, pero el empleo informal, la tercerización y la prestación de servicios se han disparado. Por eso, los especialistas sostienen que los colombianos hacen magia para sobrevivir.

Valencia da un vistazo de realidad: “La canasta básica para una familia colombiana cuesta alrededor de 45 mil pesos al día”.

Para vivir dignamente un colombiano debe percibir ingresos superiores a 1.450.000 pesos, teniendo en cuenta que un colombiano solo para ir a trabajar debe destinar 12.000 pesos, distribuidos en alimentación y transporte.

Lo peor es que esto tendría implicaciones mayores, Valencia subraya: “el ministro de Hacienda, el



rector de la política económica en el país, ya anunció que no debería haber un incremento de los salarios de los colombianos

para el 2016, justamente por cuenta de la inflación”.

Programas sociales como Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Adulto Mayor y los de primera infancia contribuyeron de manera contundente en la reducción de las cifras de pobreza. Pero son simples paliativos. Cifras que en la realidad ocultan las altas tasas de desigualdad e inequidad.

ENCUENTRO: DIRECTOR, Jairo Arenas Acevedo. PERIODISTAS, Omaira Morales Arboleda y Fabio Urrego. PRODUCTORA, Jadith Amórtegui Acosta. CAMARÓGRAFO, Mauricio Ángel González. EDITOR, Gisella Zárate. DISEÑO Y CORRECCIÓN DE ESTILO, Ernesto Enrique Ballesteros.